

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

**Medellín, ocho (8) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 del Decreto 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por GLADIS DEL SOCORRO MONCADA ESTRADA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-013-2020-00247-01).

### ANTECEDENTES

La demandante pretende la declaratoria por vía judicial de la nulidad del dictamen emitido por la convocada, para que con base a la experticia arribada en este trámite, se declare el derecho que le asiste a la pensión de invalidez a partir del 18 de mayo de 2016, para cuando fue definida la estructuración del estado, con el correlativo reconocimiento de los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Como sustento de lo anterior, comentó que se encuentra afiliada a Colpensiones, entidad que calificó su pérdida de capacidad laboral en un 24.48% con fecha de estructuración del 11 de julio de 2019. Por parte de la Universidad de Antioquia se practicó un dictamen el 12 de mayo de 2016 que no coincide con el análisis patológico posterior y que arrojó una pérdida de capacidad laboral del 58.17% con fecha de estructuración del 18 de mayo de 2016. Aduce que cuenta con las exigencias para acceder a una pensión de

invalidez por contar con más de 50 semanas en los 3 años anteriores a la data de estructuración, además de contar con más de 1000 semanas cotizadas y una deficiencia superior al 50%. El 11 de octubre de 2019 elevó reclamación de la prestación sin que a la fecha se haya pronunciado la entidad sobre la solicitud.

COLPENSIONES, al dar respuesta al libelo aceptó la calificación emitida con desconocimiento de la otra experticia rendida, afirmando no existir mérito en las pretensiones por no estar satisfechos los requisitos legales para el otorgamiento de la prestación en tanto la demandante no cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Como medios exceptivos de mérito propuso los que denominó: Inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez / pensión anticipada de vejez por invalidez, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora o indexación, prescripción, buena fe de Colpensiones, compensación e imposibilidad de condena en costas.

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín mediante providencia emitida el 08 de febrero de 2022, DECLARÓ que a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por contar con una pérdida de capacidad laboral del 58.17% de origen común estructurada el 18 de mayo de 2016. CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de \$60.663.556 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 18 de mayo de 2016 y el 31 de enero de 2022, ordenando seguir reconociendo a partir del 01 de febrero de 2022 una mesada pensional en cuantía de un SMLMV. CONDENÓ a Colpensiones a pagar la indexación de la condena al momento de su pago, autorizando los descuentos por salud. ABSOLVIÓ a Colpensiones de las demás pretensiones de la demanda, e impuso costas a esta demandada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$4.200.000.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor de Colpensiones por resultarle la decisión plenamente desfavorable sin que fuera por alzada atacada la decisión.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Al tenor de las directrices procesales que dictan las normas que regulan el asunto, en esta oportunidad el análisis se sintetiza a la cuestión de la acreditación de los requisitos de ley para que la demandante pueda acceder a una pensión por invalidez en el sendero de la nulidad de la experticia rendida por Colpensiones.

Para ese fin, se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL; las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y las EPS, con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional. Calificaciones que pueden ser sometidas a consideración de las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional en primera instancia, y que son apelables ante la Junta Nacional de Calificación.

Esa valoración del estado de salud de la persona calificada, debe ser completa e integral, pues las entidades calificadoras están obligadas *“a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente”* (sentencia T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que los dictámenes que profieran las entidades autorizadas pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas, contando el Juez con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones pues la Corporación ha sostenido que esos dictámenes, a pesar de su importancia, no

representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria (SL5280-2018, SL2349-2021, SL2627-2022).

Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes que se emiten ante la jurisdicción ordinaria laboral, aportando un nuevo dictamen u ordenándose por el Juez la realización de otro, por lo que en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por las EPS, AFP, ARL, Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración; y ya contándose con diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los falladores pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción en relación con los demás elementos de prueba (SL4346-2020).

Esa valoración que realiza el operador judicial, debe partir de las reglas de la sana crítica (experiencia, lógica y ciencia, art. 232 del CGP), sin pasar por alto el contenido del artículo 226 del mismo compendio procesal, aplicable por remisión analógica que permite el 145 del CPT y la SS., que impone criterios objetivos para otorgar mayor credibilidad a una u otra prueba de este tipo. Específicamente, el inciso 5° de esa disposición, refiere que el diagnóstico debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Además, para que el dictamen adosado por la parte sea eficaz probatoriamente, debe cumplir con los requisitos formales.

En efecto, teniendo en cuenta que los dictámenes emitidos por las entidades autorizadas por la Ley no se constituyen en prueba definitiva e incuestionable en el marco del proceso ordinario, la activa ataca el que expidió Colpensiones y arriba uno nuevo que produjo la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Salud Pública.

Para dar definición al caso, esta Sala acude a las valoraciones con las que se cuenta. La primera, fue entregada por la Universidad de Antioquia el 14 de junio de 2016 (Págs. 35-43 Archivo 01) con base a un examen físico, la historia clínica

y pruebas diagnósticas, en la que se calificó la pérdida de capacidad laboral de la señora Moncada Estrada en un 58.17%, estructurada el 18 de mayo de 2016, siendo los diagnósticos que intervinieron en la calificación los de *“fibromialgia”*, *“trastorno depresivo recurrente grave con síntomas psicóticos”*, *“hipertensión arterial”*, *“hemorroides”*, *“trastorno de somatización”* y *“gastritis erosiva”*, todos respaldados con el amplio historial médico arribado al trámite (Archivo 40).

El segundo dictamen, expedido por Colpensiones el 24 de febrero de 2020 (Págs. 29-34 Archivo 01 y Págs. 61-66 Archivo 10) tuvo por apoyo la exploración corporal y estudios clínicos, donde a partir de los diagnósticos de *“episodio depresivo grave con síntomas psicóticos”* e *“hipertensión esencial”* otorgó una pérdida de capacidad laboral del 24.48% con fecha de estructuración del 11 de julio de 2019.

Atendiendo el contenido de los conceptos, encuentra esta colegiatura que asiste razón a la *a quo* cuando asentó que el dictamen allegado con la demanda, permite el convencimiento requerido para acceder a las pretensiones, por los motivos que pasan a exponerse.

En primera medida, aunque ambas experticias fueron realizadas a partir de la normatividad vigente para la data de cada evaluación, esto es, bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1507 de 2014 - Manual Único de Calificación-, se observan divergencias que resultan de trascendencia y que dan mérito a los porcentajes disímiles encontrados por las calificadoras.

Lo que encuentra la Sala es que aun cuando el estudio realizado por Colpensiones fue posterior, tuvo un acceso absolutamente limitado al historial médico y clínico de la paciente, lo que dio paso a que no se incluyeran todas las patologías registradas en esa documental reservada, ni fueran apreciados los conceptos que por cada una de las especialidades tuvo atención la demandante en todo el tiempo de evolución, ya que lo que muestra el dictamen es la observación de unos registros médicos por psiquiatría, medicina interna y ginecología que datan de mayo, junio y julio de 2019, lo que impulsó obviar la *“fibromialgia”*, la *“hemorroides”*, el *“trastorno de somatización”* y la *“gastritis erosiva”*, que aunque es verdad que tanto la fibromialgia como el trastorno de

somatización fueron incluidas dentro de las deficiencias por trastornos psicóticos y del humor- tabla 13.2- y por tanto el valor asignado es uno solo, el resultado es sin duda variable en el momento de asignar el porcentaje por razón de los antecedentes y hallazgos que ya no son con base a un solo diagnóstico sino a los episodios, presencias y persistencias de cara a todas estas patologías intrínsecamente relacionadas y que surgieron desde aproximadamente el año 2014 cuando presentó cuadros de dolores osteomusculares que fueron evolucionando con persistencia en el cuadro clínico e impulsaron la salida de su vida productiva con asocio a síntomas depresivos por el dolor crónico que han producido irritabilidad, agresividad, problemas familiares y personales con ideas suicidas, contexto que explica junto con el conocimiento de la calificadora de la Universidad de Antioquia de un detalle más completo sobre la evolución y los síntomas pues pudo conocer las referencias médicas dadas entre el año 2008 y el año 2016, que le fuera asignada a esta deficiencia el porcentaje de la clase III que corresponde al 60% donde hay un episodio depresivo con duración de más de dos años, y no el 20% que Colpensiones incluyó con la clase II a partir de antecedentes clínicos incompletos que de ninguna manera dan cuenta de los episodios y el nivel de compromiso de estos trastornos en la salud de la paciente que funden como acertada la asignación en el dictamen traído por la parte al proceso.

Sobre la hipertensión arterial que fue tomada en cuenta en ambas pericias, se tiene que aun cuando el historial médico la clasifica en un riesgo cardiovascular bajo, el punto notable en el valor de la deficiencia establecido emerge de la terapia medicamentosa múltiple - losartan 50 mg, propranolol 80 mg, hidroclorotiazida 25 mg, tandolapril 2 mg (Pág.8,23,29 Archivo 40)-, cuyo tratamiento ha venido siendo suministrado desde su aparición en el año 2008, además de una hipertrofia hallada en las cavidades que encuadran acertada la calificación de esta deficiencia en la clase 2 y no en la 1 que dispuso Colpensiones, con desconocimiento del tratamiento en el tiempo de su evolución.

Ya la gastritis erosiva y la hemorroides claramente influyen en el resultado de la calificación por cuanto Colpensiones se abstuvo de incluirlas en la experticia pese a reflejar el historial clínico que son patologías con una evolución que data

desde el año 2013 cuando en virtud de una endoscopia digestiva fue arrojado el diagnóstico de “gastritis crónica antral”, con rectorragia y un diagnóstico de hemorroides desde esa misma calenda que a 2020 permanece, estando presentes con un compromiso moderado y crónico con evolución bajo tratamiento farmacológico, que no se permiten ser excluidas.

Sobre el rol laboral en el que también se verifica una diferencia importante en el careo de las calificaciones, se observa en la pericia de la Universidad de Antioquia un estudio más minucioso y pormenorizado a partir de las actitudes y aptitudes de orden psico - cognitivo y físico de la demandante, la autosuficiencia económica y la edad cronológica, que acorde a sus particulares circunstancias y entorno de trabajo no es posible hablar de limitaciones leves para la ejecución de su actividad laboral como se enrostra dentro de la categoría 2 fijada por Colpensiones, sino que a partir de una condición médica donde surgió una afectación en su vivir, la fuerza de trabajo debió ser suspendida de cuenta del dolor crónico persistente que dio paso a un trato agresivo a las personas por explosividad comportamental, a auto medicarse para permanecer dormida, presentar desánimo constante para la realización de cualquier actividad, crisis persistentes y frecuentes, cogniciones disfuncionales, síntomas psicóticos, intención suicida u homicida, se considera más atinada la categorización dada en la pericia arribada donde se está ante un componente de desempeño con limitaciones moderadas.

También guarda coherencia con el apoyo médico que hizo parte de la valoración por parte de la Facultad de Salud Pública la fuente de la fecha de estructuración, ya que el médico evaluador de Colpensiones no expone los argumentos juiciosos que le permitieron definir el espacio temporal a partir del cual la demandante adquirió la condición calificada, en contraposición a lo expuesto por la médica ocupacional traída por la activa, quien en su sustentación informó que al ser la patología de la esfera mental más significativa a la hora de determinar los porcentajes en las deficiencias, consideró el 18 de mayo de 2016 como la fecha en la que la demandante perdió en el grado asignado su capacidad laboral por corresponder a la del reporte del especialista - psiquiatra- para asentar el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente grave con síntomas psicóticos.

Bajo tales reflexiones se tiene que en el asunto, la médica Gloria Isabel López calificó padecimientos que tuvieron pleno sustento en la historia clínica que no englobó la pericia última de la entidad convocada, y conforme al artículo 226 del CGP, dio clara explicación médica y técnica de las deficiencias calificadas, con aplicación estricta del Decreto 1507 de 2014 en coherencia con los tratamientos médicos, la evolución y las condiciones de salud de la demandante adquiridos a lo largo de su vida con persistencia para el tiempo de la valoración, dándose indicación precisa de las razones que dieron lugar a acudir a las tablas y categorías acorde a la frecuencia, continuidad en los síntomas, los episodios y formulación farmacológica, considerándose que esta pericia se trata de una clara y exhaustiva en sus argumentaciones además de integral de cara a la totalidad de patologías calificadas y la posibilidad documental otorgada, que da cuenta de un resultado más ajustado a la realidad de la paciente que Colpensiones no pudo concretar.

Es válido advertir, que ni los falladores ni los apoderados a excepción de quienes adelantaron estudio en el área médica, contamos con los conocimientos idóneos de medicina que nos otorguen la facultad de dar aplicación al Manual de Calificación de manera aislada a las valoraciones de los expertos y determinar bajo ese derrotero el porcentaje de deficiencias que recae en la paciente, escapando ello de nuestra competencia jurídica, sino que nuestra función dentro de la administración de justicia en este tipo de asuntos, se encuadra en determinar el acogimiento de la valoración a los requisitos legales de validez, por manera que si Colpensiones hubiera considerado bajo lineamientos estrictamente técnicos que el peritaje traído por la activa no está sujeto a los parámetros médicos, le era dable presentar otro dictamen o derruirlo por medio de la contradicción sin que ello se vea logrado en el asunto.

Lo anterior deja claro que ante la contraposición de diferentes conceptos científicos, el dictamen emitido por la Universidad de Antioquia así como a la falladora inicial, merece credibilidad y poder de convicción a esta Sala Laboral dentro del marco de la libertad probatoria por acompasarse de manera más razonable a la verdad médica de la demandante, evidenciándose la coincidencia con la decisión del *a quo*, que genera en este Juez Colegiado la convicción relativa a que, la pérdida de capacidad laboral de la demandante corresponde a



un 58.17% suficiente para acreditar las exigencias del artículo 38 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 aplicable dada la fecha en que se delimitó su estructuración, por ser indiscutida la acreditación del requisito de semanas que hace acreedora a la demandante de la pensión de invalidez concedida.

Conforme a lo previo, siendo indiscutido que a la demandante le correspondería por mesada pensional la equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, se tiene que efectuados los cálculos de rigor, Colpensiones adeuda a la demandante la suma de \$63.595.146 que arroja la liquidación de un retroactivo calculado entre el 13 de agosto de 2017 y el 28 de febrero de 2023, pues se considera que contrario a lo que asumió la Juez de Instancia, los guarismos que atañen a este concepto si sufrieron afectación por el fenómeno de la prescripción toda vez que aun cuando el dictamen emitido por Colpensiones tiene por fecha el 24 de febrero de 2020, la tesis de la H. Corte Suprema de Justicia en este punto es que el término trienal empieza a correr desde cuando se tiene conocimiento sobre el estado de invalidez, y lo que surge patente en este caso, es que fue el dictamen entregado el 14 de junio de 2016 el que dio cuenta de la condición de la demandante bajo una calificación superior al 50%, por lo que debe pregonarse que es desde allí que debieron contabilizarse los tres años de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, que al dejarse transcurrir sin constancia dentro del líbello ni el expediente administrativo de la reclamación del derecho prestacional, da lugar a que partiendo de la fecha de la presentación de la demanda - 13 de agosto de 2020- las mesadas previas al 13 de agosto de 2017 se encuentren prescritas.

AÑO	VR. MESADA	N° MES	TOTAL
2017	\$ 737.717	5 y 18 días	\$ 4.131.215
2018	\$ 781.242	13	\$ 10.156.146
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	13	\$ 13.000.000
2023	\$ 1.160.000	2	\$ 2.320.000
TOTAL			\$ 63.595.146

Del monto aducido deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, debiendo pagarse una mesada pensional en favor de Gladis del Socorro Moncada Estrada a partir del 01 de marzo de 2023 de \$1.160.000, sin perjuicio de los incrementos de ley.

Esta suma habrá de ser indexada para el momento del pago efectivo, sin que ello implique de manera alguna una condena adicional, sino que más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación e impide que la orden representada en dinero pierda su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario en virtud de los principios de equidad e integralidad del pago.

Finalmente, sobre las costas procesales impuestas a Colpensiones debe señalarse que tal rubro es procedente en la forma ordenada, en tanto se trata de una imposición bajo criterios objetivos a cargo de quien fue vencido en juicio conforme lo pregonan el numeral 1° del artículo 365 del CGP, ya que tales rubros no supeditan su reconocimiento a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a las resultas del proceso, siendo una consecuencia procesal del ejercicio de acción, y claramente frente a Protección S.A le fue resuelta la litis desfavorablemente (Ver SL947-2021 y AL471-2018). Y es que la finalidad de las costas procesales es cubrir las erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, por lo que su ineludible comparecencia al proceso para efectos de su defensa no lo exonera de la asunción de estos gastos.

Atendiendo las consideraciones previas, la sentencia objeto de consulta habrá de ser modificada en cuanto a la fecha de disfrute que hace variar el valor del retroactivo pensional, debiendo confirmarse en lo demás la decisión. Sin costas por el grado jurisdiccional de Consulta.


#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **MODIFICA** la fecha a partir de la cual debe ser reconocida la pensión por invalidez en virtud de la prosperidad de la prescripción y que

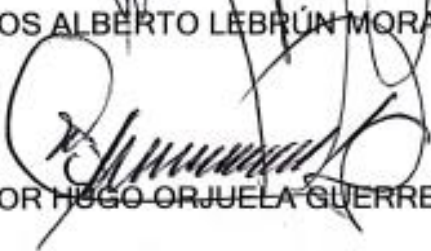
corresponde al 13 de agosto de 2017, y que da pie a que el retroactivo pensional adeudado equivalga a \$63.595.146 hasta el 28 de febrero de 2023. **CONFIRMA** en lo demás. Sin costas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).

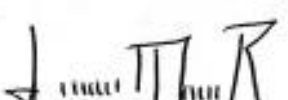
Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501320200024701</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>GLADIS DEL SOCORRO MONCADA ESTRADA</b>
<b>Demandado:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>8/03/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA Y MODIFICA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 9/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario